

Guadalajara de Buga, febrero 22 del 2016

Honorable

**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE
BUGA-Reparto**

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
LEY 1437 DEL 2011

Demandante: LUIS ANGEL AROCA PATIO

Demandados: NACION -MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

JOHN WILSON PLATA MÉNDEZ abogado en ejercicio e identificado como aparece registrado al pie de mi correspondiente firma, conforme al poder adjunto obrando en nombre y en representación del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, CC No. 1.075.217.815 de Neiva (H)¹ y teniendo en cuenta que el último lugar en el que laboro el actor fue en la estación de policía de tuluá (V), **lo cual afirmo bajo la gravedad de juramento**, por medio del presente escrito presento acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las actas medico laborales No. 1717 Del 11 de diciembre del 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca², el acta medico laboral M15-174 MDNSG-TML-41.1 registrada a folio No. 055 del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía de fecha 25 de agosto del 2015 proferida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía³ y, contra la resolución de retiro No. 05492 del 07 de diciembre del 2015 proferido por el director general de la policía nacional mediante la cual se le retiro el servicio activo de la policía nacional por disminución de la capacidad sicofísica⁴. Entidades debidamente representada por el señor general JORGE HERNANDO NIETO ROJAS o por quien haga sus veces; la acción versa en la siguiente forma:

I. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

La solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el día 09 de noviembre del 2015, siendo admitida y fijándose fecha para la audiencia de conciliación el día 14 de enero del 2016, fecha en la que la entidad demanda allego certificación del comité de conciliación

¹ Ver folio 1 adjunto.

² Ver folios 7-9 adjunto

³ Ver folios 10-12 adjunto

⁴ Ver folios 13-14 adjunto

donde decide no proponer formula conciliatoria, y por tal razón ese mismo día se expidió la constancia de no acuerdo quedando agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 3 de la ley 640 del 2001⁵

II. PRETENSIONES:

PRIMERO:- Solicito al honorable declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. *acta medico laboral No. 1717 Del 11 de diciembre del 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca*
2. *acta medico laboral M15-174 MDNSG-TML-41.1 registrada a folio No. 055 del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía de fecha 25 de agosto del 2015 proferida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía*
3. *resolución No. 05492 del 07 de diciembre del 2015 proferido por el director general de la policía nacional, mediante el cual se retiro del servicio activo de la policía nacional por disminución de la capacidad sicofísica Al patrullero LUIS ANGEL AROCA PATIO **Por Haber Sido Calificado Como No Apto Sin Reubicación Laboral.***

SEGUNDO:- Que como consecuencia de la anterior declaración y **A Título De Restablecimiento Del Derecho** ordénese a la entidad demandada **reintegrar** al señor LUIS ANGEL AROCA PATIO al cargo de patrullero de la Policía Nacional del cual fue desvinculado o a otro de igual o superior categoría que sea acorde con sus condiciones actuales y con sus habilidades y destrezas. Esa reincorporación deberá traer aparejada la afiliación a los servicios médicos que presta la institución

TERCERO:- DECLÁRESE administrativamente responsable a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA –POLICÍA NACIONAL, representada legalmente por el señor general RODOLFO PALOMINO LÓPEZ o quien haga sus veces, por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados al señor LUIS ANGEL AROCA PATIO con ocasión del proferimiento de las **actas medico laborales** Nos. 1717

⁵ Ver folio No. 2-5 adjunto- constancia de no acuerdo como requisito de procedibilidad de esta acción.

Del 11 de diciembre del 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca, acta medico laboral M15-174 MDNSG-TML-41.1 registrada a folio No. 055 del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía de fecha 25 de agosto del 2015 proferida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía y la resolución de retiro No. 05492 del 07 de diciembre del 2015 proferido por el director general de la policía nacional, mediante el cual se le retiro del servicio activo de la policía nacional por disminución de la capacidad sicofísica;
Lo Anterior Conforme A La Declaratoria De Nulidad De Los Actos Acusados y/o Su Revocatoria Directa

CUARTO:- Declárese que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio por parte del actor, afirmación que se tendrá en cuenta para todos los efectos legales y, en particular, los laborales y prestacionales.

QUINTO:- Que como consecuencia de la primera declaración ***CONDENASE*** al Ministerio de Defensa- Policía Nacional a pagar a favor de LUIS ANGEL AROCA PATIO todos los sueldos, primas y demás prestaciones laborales dejados de percibir desde la fecha de ejecución del acto de retiro hasta cuando se haga efectivo el reintegro.

SEXTO:- que como consecuencia de la primera declaración se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –POLICÍA NACIONAL a pagar a favor del señor LUIS ANGEL AROCA PATIO ***cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes***, por concepto de perjuicios morales sufridos con motivo de las actas medico laborales acusadas y/o el retiro del servicio activo de la policía nacional por disminución psicofísica, al Equivalente en pesos colombianos a los salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva.

SEPTIMO:- La entidad demandada dará cumplimiento a la presente sentencia, conforme al término de cumplimiento indicado en el Código de procedimiento Administrativo.

OCTAVO:- Condénese en costas a la entidad demandada si a ello hubiese lugar.

III. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

NOVENA:- *en subsidio de la pretensión número sexta (6ta) de este libelo demandatorio, es decir en caso de que sea negada, solicito que como consecuencia de la responsabilidad administrativa que generaron los ilegales actos acusados y/o su revocatoria, se **CONDENE** a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA –POLICÍA NACIONAL, representada legalmente por el señor general RODOLFO PALOMINO LÓPEZ o quien haga sus veces, A pagar a favor del señor LUIS ANGEL AROCA PATIO **cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes** por concepto de perjuicios morales sufridos con motivo del proferimiento y ejecución de los Actos acusados, al Equivalente en pesos colombianos a los salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva.*

IV. HECHOS QUE SUSTENTAN MIS PRETENSIONES

1. El señor LUIS ANGEL AROCA PATIO, CC No. 1.075.217.815 de Neiva (H)⁶, ingreso a la policía nacional el día 11 de diciembre del 2005, ostentando el grado de patrullero hasta el día 11 de diciembre del 2015, para un total de tiempo laborado de 10 años aproximadamente⁷, lapso donde cumplió a cabalidad con las múltiplex tareas asignadas dentro de los multiplex procesos que desarrolla la policía nacional, así lo acredita su folio de vida y el formulario de seguimiento y evaluación de desempeño policial obrante a folios 36-72 adjuntos.
1. En la fecha 11 de diciembre del 2015 fue retirado del servicio activo por disminución de la capacidad sicofísica, conforme lo acredita la resolución No. 05492 del 07 de diciembre del 2015 proferida por el director general de la policía nacional⁸, la cual se fundó en el acta medico laboral No. 15-174 registrada a folio 055 de fecha 25 de agosto del 2015 del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, **acta medico laboral que le fue notificada al actor por correo electrónico al actor el día 28 de agosto del 2015**⁹.
2. El retiro del actor estuvo fundado ilegal e irregularmente en los siguientes actuaciones:

⁶ Ver folios 6 adjunto

⁷ Ver folios 24 adjuntos

⁸ Ver folio No. 13-14 adjunto. resolución de retiro del señor LUIS ANGEL AROCA PATIO

⁹ Ver folios 10-12 adjunta

- La actuación administrativa por lesiones- informe administrativo
- La calificación medico laboral dos instancias
- El acto administrativo definitivo- por el cual fue retirado del servicio por disminución de la capacidad laboral

3. **EL CASO EN CONCRETO:** debe declare la nulidad de los actos administrativos acusados y, por ende restablecerse los derechos laborales del actor, tal cual como aparece registrado en la parte petitoria de este libelo demandatorio por contravenir el ordenamiento jurídico; luego entonces en vista de desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad de los actos administrativos acusados, la sustento bajo los siguientes cargos:

PRIMER CARGO

3.1. FALSA MOTIVACIÓN: los actos administrativos demandados son nulos, porque no guardan concordancia con el principio de legalidad, porque la motivación del acto de retiro que le fue notificado al actor no corresponde a la realidad, toda vez que el diagnóstico médico en el que se soporta la salida del miembro de la Policía debe estar vigente al momento de proceder al retiro; la disposición indica que son 90 días siguientes a la expedición de la calificación médica. De tal manera que si el acto de retiro se expide con base en un concepto médico vencido, su motivación no corresponde a la realidad, como sucedió en este caso, en el cual, desde la óptica constitucional, se retiró a una persona del servicio de la Policía con consecuencias graves para sus derechos a la salud y sus condiciones de vida digna pues el señor Luis Ángel Aroca es la única persona que trabajo en su hogar con la cual le proporciona todas las necesidades a su hijo Camilo aroca de tan solo 2 años^{10,11}, cuando para la época no tenía concepto vigente ni se consideraba “*no apto*”, veamos:

3.1.1. Está acreditado dentro del sistema de relación de excusas del servicio de la policía nacional, que el señor LUIS ANGEL AROCA PATIO desde el día 21/05/2014 al 24/05/2014, fue incapacitado de forma total por 03 días, incapacidad que se presento porque el aquí prenombrado ***presento una simple ansiedad***¹²

¹⁰ Ver folio 74 adjunto

¹¹ Ver folios 32 adjunto

¹² Ver folios 33 adjunto

3.1.2. En razón a la incapacidad antes mencionada, al accionante le fue realizada la junta medico laboral No. 1717 el día 11 de diciembre del 2014 por parte de la seccional de sanidad valle del cauca, donde se le determino (i) que presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 12.50%, (ii) determinándose que padecía de ***un trastorno de ansiedad***, indicando el médico tratante que no debía realizar turnos nocturnos, ni funciones de vigilancia, hasta tanto este con medicación, no asignarle actividades operativas, ni de impacto, no trabajo en alturas y no porte de armas de fuego, no conducir motocicletas, ni vehículos y control estricto con psiquiatría, (iii) en conclusión fue considerado no apto, sin reubicacion laboral¹³

3.1.3. Inconforme con la decisión anterior, el hoy accionante interpuso recurso de apelación la cual fue admitida por el ministerio de defensa y en fecha 25 de agosto del 2015 se le realizo el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, a través de la decisión del acta medico laboral No. M15-174 MDNSG-TML-41.1 registrada a folio No. 055 del libro del tribunal médico laboral, en la cual se **RATIFICO INTEGRALMENTE** de la junta medico laboral No. 1717 del 11 de diciembre del 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca, mediante la cual se determino una pérdida de la capacidad laboral al actor del 12.50% considerándolo no apto, sin reubicacion laboral, esbozando la entidad accionada que por la severidad de la patología del actor, le impide desempeñar adecuadamente las funciones policiales, tiene restricciones para no realizar turnos nocturnos, no uso de armas, no funciones de vigilancia, no conducir vehículos, además por pertenecer a una institución jerarquizada pone en peligro su vida y la de sus compañeros por la patología anotada"¹⁴, concepto que fue expedido contrariando la realidad de hecho que obra en la historia clínica del actor¹⁵.

3.1.4. A folio 12 y 13 adjuntos está acreditado que el día 28 de agosto del 2015 le fue notificada al accionante, mediante correo electrónico institucional, el contenido del acta medico laboral No. M15-174 MDNSG-TML-41.1 registrada a folio No. 055 del libro del tribunal médico laboral, de conformidad con el artículo 67 del CPACA, atendiendo a que el actor el día en que se

¹³ Ver folios 7-9 adjunto

¹⁴ Ver folios 10-12 adjuntos

¹⁵ Ver folios 80-204 adjuntos

realizo el tribunal médico laboral, autorizo a este organismo para que lo notificara de tal decisión en el correo electrónico institucional¹⁶.

3.1.5. El día 11 de diciembre del 2015, la oficina de talento humano del departamento de policía valle del cauca, le notifico al señor LUIS ANGEL AROCA PATIO, la resolución No. 05492 del 07 de diciembre del 2015 proferido por el director general de la policía nacional, mediante la cual se resolvió retirarlo del servicio activo de la policía nacional, por disminución de la capacidad sicofísica de conformidad con lo expuesto en los articulo 54 inciso 1 y 55 numeral 3 del decreto ley 1791 de 2000 y según lo expuesto en la parte considerativa de dicha resolución¹⁷.

3.1.6. Aunado a lo anterior, la entidad demandada motivo falsamente el retiro del actor, violando con ello el principio de legalidad, toda vez que por disposición del artículo 7 del decreto 1796 del 2000, establece "el concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales", al respecto ha de examinarse que la resolución No. 05492 del 07 de diciembre del 2015 proferido por el director general de la policía nacional, mediante el cual se retiro del servicio activo de la policía nacional por disminución de la capacidad sicofísica Al patrullero LUIS ANGEL AROCA PATIO **Por Haber Sido Calificado Como No Apto Sin Reubicación Laboral**, Esta falsamente motivada porque se sustento en el acta medico laboral acusada No. 15-174 registrada a folio No. 055 de fecha 25 de agosto del 2015, en la cual se establece que no se recomienda su reubicacion laboral por la severidad de su patología (sic), la cual fue notificada al actor el día 28 de agosto del 2015 tal cual como se acredita en los folio 12 y13 adjuntos, tiempo

¹⁶ ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior ***también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:***

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.

¹⁷ Ver folio 13-14 adjunto

que al compararse con la fecha de la expedición de la resolución de retiro al actor (11 de noviembre del 2015)¹⁸, deja demostrado que habían transcurrido 3 meses y 14 días, demostrándose de esa forma la pérdida de vigencia y validez de dicho concepto medico laboral que expidió el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía¹⁹.

3.1.7. conforme al hecho anterior y de cara al artículo 7 del decreto 1796 del 2000²⁰, examinamos en esta norma que el diagnóstico médico en el que se soportó la salida del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO de la Policía no estaba vigente al momento de proceder al retiro; pues la disposición indica que son 90 días siguientes a la expedición de la calificación médica. De tal manera que como el acto de retiro se expide con base en un concepto médico vencido, su motivación no corresponde a la realidad, como sucedió en el presente caso, en el cual, desde la óptica constitucional, se retiró al actor del servicio de la Policía con consecuencias graves para sus derechos a la salud y sus condiciones de vida digna, cuando para la época de su retiro no tenía concepto vigente ni se consideraba “no apto sin reubicación laboral”

3.1.8. Es evidente la invalidez de la Resolución 05492 de 07 de diciembre del 2015, pues la medida adoptada en dicho acto administrativo, se encuentra falsamente motivada, en cuanto está demostrado que la entidad demandada no respetó el procedimiento legal previsto en el régimen especial de la Policía Nacional al ordenar su retiro del servicio activo por disminución de su capacidad sicofísica, cuando dicho concepto sicofísico había perdido su eficacia.

3.1.9. En conclusión, ha de observarse con objetividad que el acta medico laboral del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, le fue notificada al actor a través a su correo electrónico institucional, el día 28 de agosto del 2015,

¹⁸ Ver folio 13-14 adjuntos

¹⁹ Ver folios 10-12 adjuntos

²⁰ DECRETO 1796 DEL 2000. ARTICULO 7o. VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS EXAMENES DE CAPACIDAD PSICOFISICA.

Inciso 2... El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales; **sobrepasado este término, continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica.**

circunstancia que al compararse con la fecha de expedición o notificación de la resolución de retiro del actor (11 de diciembre del 2015) examinamos que ya habían transcurrido 3 meses y 14 días demostrándose que había expirado el término de vigencia de dicho concepto medico, y por lo tanto la Ley consagra como efecto inmediato el recobro de vigencia del concepto de aptitud²¹, circunstancia que desvirtúa la causal de retiro contenida en la resolución de retiro No. 05492 de 07 de diciembre del 2015, proferido por el director general de la policía nacional, mediante la cual se resolvió retirar del servicio activo de la policía nacional al señor LUIS ANGEL AROCA PATIO por la supuesta disminución sicofísica.

SEGUNDO CARGO

3.2. INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN LAS QUE SE DEBÍA FUNDAR: los actos administrativos demandados son nulos, porque no guardan concordancia con el principio de legalidad, toda vez que la entidad accionada omitió aplicar al caso en concreto la aplicación del artículo 59 del decreto 1791 del 2000, que dispone las **EXCEPCIONES AL RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD SICOFÍSICA**, mediante el cual se podrá mantener en servicio activo a aquellos policiales que habiendo sufrido disminución de la capacidad sicofísica y obtenido concepto favorable de la Junta Médico Laboral sobre reubicación, siempre que por su trayectoria profesional lo merezcan y sus capacidades puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción; al respecto omitió la accionada valorar las multiplex capacitaciones que el actor realizo en la institución, la cuales si son acordes para desempeñar funciones administrativas, tales como

²¹ Así se lee en la citada norma: decreto 1796 del 2000- artículo 7°

“ARTICULO 7o. VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS EXÁMENES DE CAPACIDAD PSICOFISICA. Los resultados de los diferentes exámenes médicos, odontológicos, psicológicos y paraclínicos practicados al personal de que trata el artículo 1o. del presente decreto, tienen una validez de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que le fueron practicados.

El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales; sobrepasado este término, continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica.

docencia o de intrusión propias de la institución y no como erradamente lo plantea las entidades demandadas en las actas medico laborales acusadas en las que se fundó la resolución de retiro del actor

3.2.1. Omitió la entidad accionada que el señor LUIS ANGEL AROCA PATIO, dentro del servicio activo de la policía nacional, realizo múltiples cursos de capacitación, entre ellos, técnico laboral por competencias en secretariado general sistematizado, seminarios múltiples de vigilancia comunitaria, liderazgo y comunicación comunitaria, seminario de inteligencia y contrainteligencia, se capacito en planes de impulso al plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, talles de actualización institucional para el efectivo desempeño policial, realizo múltiples cursos de capacitación para el servicio policía con énfasis en manejo de pistola sig sauer y técnico profesional en servicio de policía²². Por tan excelentes capacitaciones y por su labor que desempeño como jefe de prevención y educación ciudadana, el día 23 de diciembre del 2014 fue notificado y llamando a concurso para que presentara las pruebas psicotécnicas y de conocimientos policiales demostrándose de esa forma que las autoridades medico laborales en sus dos instancias omitieron valorar la trayectoria laboral y las excelentes funciones administrativas que realizo el actor en la policía nacional durante el lapso que estuvo incapacitado²³

3.2.2. Es evidente que las instituciones accionadas se basaron en cuestiones eminentemente subjetivas, para retirar al actor del servicio público de policía, pues la simple comparación de las excusas medicas²⁴, donde se describe una simple ansiedad cuya incapacidad no supero los tres días, deja demostrado que la argumentación que esbozaron para no reubicar laboralmente al actor, es vana, pues **la estructuración de esta patología no está probada en las actas medico laborales acusadas**²⁵, lo cual demuestra que el proceso medico laboral en su dos instancias que se le llevo a cabo al accionante, está viciado por una vía de hecho de defecto factico en la medida que las entidades demandadas **omitieron valorar las multiplex capacitaciones que el actor realizo en la institución y el tiempo real que estuvo excusado**

²² Ver folios 15-23 adjuntos

²³ Ver folios 75-78 adjuntos.

²⁴ Ver folios 33-35 adjuntos

²⁵ Ver folios 7-11 adjuntos.

del servicio activo por la “supuesta patología psiquiátrica” que padece, omisión con la que se contraria lo preceptuado en la sentencia C-381 del 2005 proferida por la honorable corte constitucional, mediante la cual el alto tribunal constitucional modulo los efectos de la sentencia en mención, bajo el entendido que *“el retiro del servicio por disminución de la capacidad sicofísica sólo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción”*²⁶, al respecto, la corte constitucional fue clara en ordenar lo siguiente:

*“No podría mantenerse en la Policía todo el grupo de personas que sufran alguna discapacidad, so pretexto de dar aplicación absoluta al principio de estabilidad laboral reforzada, porque se desnaturalizaría su función y se pondrían en riesgo sus importantes funciones constitucionales y legales y con ello los derechos de los ciudadanos. Con fundamento en lo expuesto, **una persona discapacitada o con disminución de su capacidad sicofísica no podrá ser retirada de la institución por ese sólo motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción.** Por ello es imprescindible que exista una dependencia o autoridad médica especializada que realice una valoración al individuo que tenga alguna disminución en su capacidad sicofísica para que, **con criterios técnicos, objetivos y especializados**, determine si dicha persona tiene capacidades que puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción propias de la institución. Solamente después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado de la Policía Nacional. Esa autoridad, conforme al artículo 59 del Decreto 1791 de 2000, acusado, es la Junta Médico Laboral. No puede dejarse tal atribución a la mera liberalidad del superior o a cuestiones eminentemente subjetivas”.*²⁷

3.2.3. Bajo el análisis anterior y en apoyo a mis pretensiones puede usted apreciar señor juez que la decisión de las autoridades medico laborales en sus dos instancias, de **No sugerir reubicación laboral al actor**, deprecada en las actas medico laboral acusadas NO están ajustadas al principio de LEGALIDAD Y VERACIDAD, porque técnicamente omitieron que solo después de valorar al actor bajo criterios técnicos, objetivos y especializados y

²⁶ Ver folio 15-23 adjuntos

²⁷ C 381 del 2005 corte constitucional

valorando las multiplex capacitaciones que este presentaba, podría recomendar o no su reubicación laboral, en ese orden La calificación médico laboral en sus dos instancias, quebranto el principio de legalidad porque no justificó él porque las capacidades del actor no podían ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción. Tal cual como lo exige el artículo 59 del decreto 1791 del 2000.

3.2.4. En conclusión, **TACHO DE FALSAS LAS ACTAS MEDICO LABORALES ACUSADAS**, bajo las siguientes razones, la entidad demandada incurrió en las siguientes omisiones

A. omitió manifestar y probar porque las capacidades del actor no podían ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción

B. omitió que solo después de valorar al actor bajo criterios técnicos, objetivos y especializados podría recomendar su no reubicación laboral.

C. Omitió que una persona discapacitada o con disminución de su capacidad psicofísica no podrá ser retirada de la institución por ese sólo motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción. Omitiendo valorar las multiplex capacitaciones que el actor realizó en la institución -policía nacional.

D. Omitió que el procedimiento médico laboral que se le realizó al actor debía ser acorde a los lineamientos constitucionales y legales fijados en las providencias C -381 del 2005, T -1048 del 2012 y T 362 del 2012 proferidas por la corte constitucional

3.2.5. Aunado a lo anterior, la escueta argumentación de la policía nacional de no sugerir la reubicación laboral del actor, es ilegal pues no guarda relación con los lineamientos constitucionales y legales que traza la corte constitucional en las sentencias C 381/05, T 1048 del 2012 y T 362 del 2012, respecto a los integrantes de la policía nacional y, que en efecto ordena la corte que a las personas que ostentan la calidad de no aptos como en el caso del señor LUIS ANGEL AROCA PATIO se les debe dar un tratamiento

igualitario frente a las tareas que contribuyen a dar cumplimiento a los propósitos constitucionales de la institución y que a pesar de no ser, por ejemplo, de carácter estrictamente operativo, revisten importancia y requieren para su desarrollo la presencia de personal vinculado a la institución. En primer lugar, se encuentra la **docencia o la instrucción**, en razón a que el personal de la Policía debe ser capacitado integralmente en academias y centros de formación especializada. De manera que se requieren personas capacitadas para desarrollar labores de instrucción y de docencia, para capacitar y orientar no sólo a los alumnos que han ingresado a la institución, sino a quienes requieren adelantar alguna especialidad.

3.3. Los actos administrativos acusados produjeron graves perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales al demandante, entiéndase como las pérdidas económicas y una profunda aflicción sobre el patrullero LUIS ANGEL AROCA PATIO, al retirársele del servicio activo de la policía nacional de forma injusta e ilegal, así lo manifiestan y acreditan los señore(a)s RUSBEL GONZALES QUINTERO, MARIBEL GÓMEZ GÓMEZ, LEIDY YOHANA RESTREPO SANTA, quienes han sido testigos presenciales de dichos eventos. Razón esta suficiente por la que el MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL debe resarcir los perjuicios causados al actor en este proceso con ocasión a la ilegalidad de los actos administrativos acusados.

V. FUNDAMENTO DE DERECHO DE MIS PRETENSIONES

Mis pretensiones encuentran su fundamento de derecho en:

1. el artículo 1, 2, 4, 13, 29 y 48 de la constitución política de Colombia, en la jurisprudencia de la honorable corte constitucional
2. Sentencia C-381/05, T 1048 del 2012 y T 362 del 2012 proferidas por la Corte constitucional.
3. Ley 361 de 1997 y las sentencias T-427 de 1992 y C-531 de 2000.
4. Sentencia C-447 de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamento 3.
5. La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971; la Declaración de los Derechos de los Impedidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975 por Resolución 3447, según la cual en la medida de sus posibilidades

los discapacitados tienen derecho a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil y productiva y remunerativa (art. 7), y Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 48° periodo de sesiones, mediante resolución n.º 48/96 del 20 de diciembre de 1993.

6. Organismo intergubernamental que tiene dentro de sus funciones elaborar un sistema normativo internacional a través del cual se reconozcan los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las condiciones de trabajo.
7. De acuerdo con la recomendación n.º 168, "la expresión persona inválida se refiere a toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo estén sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida". Allí se contempla la necesidad de que se implementen medidas para garantizar un acceso equitativo de las personas con discapacidad a la capacitación y al empleo en igualdad de oportunidades; empleo que, siempre que sea posible, debe corresponder a la elección de aquellas y a sus aptitudes individuales.
8. Es del caso traer a colación que en el Salvador la Asamblea Legislativa profirió el Decreto Legislativo 791 de 1991 mediante el cual expide la *"ley de protección y rehabilitación profesional del personal lisiado de la Fuerza Armada"*. Dicho ordenamiento tiene como objeto dictar normas básicas que permitan una mayor participación del Estado en la atención y protección a esas personas lisiadas y coadyuvar en el desarrollo de programas de rehabilitación que en su favor lleva a cabo el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. En su artículo 3 dispone que *"[l]as dependencias del Estado que pagaren los salarios de su personal con cargo al Presupuesto General de la Nación, así como las Instituciones Oficiales Autónomas, deberán dar colocación en puestos de trabajo y de acuerdo a las aptitudes que tuvieran, al personal que hubiere concluido su proceso de rehabilitación profesional, a fin de contribuir a su reincorporación a la vida activa del país. En la ocupación de aquellos cargos donde no se requiere para su cumplimiento un mayor esfuerzo físico, se dará prioridad al personal lisiado. Por lo menos, un dos por ciento del total de empleados, de cada dependencia, deberá integrarse con dicho personal"*. También se otorgan beneficios fiscales a las microempresas adquiridas por los lisiados.
9. *Cfr.* Corte Constitucional. Sentencia C-531 del 10 de mayo de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis). En dicha oportunidad la Corte analizó la

constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que impide que la disminución física, sensorial o síquica se configure por sí misma en causal de despido o terminación del contrato de trabajo, a menos que esa limitación sea demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.

VI. LAS NORMAS VIOLADAS

Los actos administrativos acusados al proferirse violentaron las siguientes normas:

- De la Constitución Política, los artículos 2, 13, 25, 29 y 365
- Ley 1437 del 2011, los artículos 137 y 138
- Artículo 7 del decreto 1796 del 2000
- numeral 3 del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000 y el resto del artículo 59 de la misma codificación.
- Artículo 79 Sección D del Decreto 094 de 1989 numeral 3-040 modificado y adicionado por el decreto 1796 del 2000

VII. PROVIDENCIA CONSTITUCIONALES VIOLENTADAS

Sentencias C -381 del 2005, T -1048 del 2012 y T 362 del 2012 proferidas por la corte constitucional

PRINCIPIOS VIOLENTADOS:

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL DISCAPACITADO, favorabilidad, estabilidad laboral reforzada DEL DISCAPACITADO, dignidad humana, debido proceso legal y constitucional

VIII. CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Los actos administrativos acusados contrariaron las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales citadas ab initio, al ser motivados falsamente, ello se fundamenta en lo siguiente: (i) la motivación del acto de retiro que le fue notificado al actor no corresponde a la realidad, toda vez que el diagnóstico médico en el que se soporta la salida del miembro de la Policía debe estar vigente al momento de proceder al retiro; la disposición indica que son 90 días siguientes a la expedición de la calificación médica. De tal manera que

si el acto de retiro se expide con base en un concepto médico vencido, su motivación no corresponde a la realidad, como sucedió en este caso, en el cual, desde la óptica constitucional, se retiró a una persona del servicio de la Policía con consecuencias graves para sus derechos a la salud y sus condiciones de vida digna, cuando para la época no tenía concepto vigente ni se consideraba “*no apto*” Y, (ii) porque omitieron aplicar al caso en concreto el artículo 59 del decreto 1791 del 2000, **infringiendo de esa forma las normas en las que se debía fundar los actos administrativos acusados**, tal infracción se avizora, en la no sustentación de la accionada respecto a la funciones administrativas de docencia o de instrucción que pudo desempeñar el actor, pues es evidente que omitió *valorar* las multiplex capacitaciones que realizó en la institución, la cuales si son acordes para desempeñar funciones administrativas, tales como docencia o de intrusión propias de la institución y no como erradamente lo plantea las entidades demandadas en las actas medico laborales acusadas en las que se fundó la resolución de retiro del actor; en ese orden los actos administrativos adolecen de dos vicios, (i) están falsamente motivada y (ii) infringieron las normas en las que se debían fundar. veamos como con tales vicios se contrariaron las normas del ordenamiento jurídico:

1. Para sustentar como en el caso en concreto se contraria el artículo 7 del decreto 1796 del 2000, es necesario traer a colación la siguiente providencia del honorable consejo de estado: sentencia de 28 de junio de 2007, radicado No. 0470-2005, actor: Edilberto Morón Arrieta contra la Policía Nacional. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, caso que es similar al que nos ocupa, pues son idénticos los supuestos fácticos:

En esta providencia, dijo el honorable consejo de estado:

"El acto de retiro por la causal de disminución de la capacidad psicofísica, debe, en primer lugar, fundarse en el concepto médico de la Junta Médico Laboral que determine la respectiva disminución física y la calificación de ineptitud para la prestación del servicio público y, en segundo término, que el concepto médico que se utilice como fundamento debe estar vigente al momento de la expedición del acto de retiro, esto es, dentro de los noventa días siguientes a la expedición de la calificación médica. De tal manera que, si el acto de retiro se expide con base en un concepto médico vencido, su motivación

no corresponde a la realidad, pues expirado el término de vigencia de dicho concepto, la Ley consagra como efecto inmediato el recobro de vigencia del concepto de aptitud, circunstancia que desvirtúa la causal de retiro (...). “.

En similar providencia del honorable consejo de estado, con idénticos fundamentos facticos, se reitero que:

Bajo este supuesto, y de acuerdo con lo preceptuado por el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, la administración no podía fundamentar el retiro del actor con base en el dictamen de una Junta Médico laboral que no tenía validez debido a su ineficacia por el transcurrir del tiempo. En efecto, la expedición de la Resolución No. 01118 de 28 de mayo de 2004, vulneró el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000 toda vez, que el retiro del actor sólo se podía dar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se le practicó la Junta Médico Laboral ²⁸.

Bajo este derrotero, concluye esta defensa que es evidente la entidades demandadas transgredieron el inciso segundo del artículo 7 del decreto 1796 del 2000, al retirar al actor con base en un concepto médico vencido, como lo es el acta del tribunal médico laboral que fue realizada al actor el día 25 de agosto del 2015, tal como se enuncio en los hechos de la demanda, el cual había perdido su eficacia desde hacía 14 días, demostrándose de esa forma la falsa motivación que las irradió.

2. En esa medida, las razones jurídicas por las cuales los actos administrativos acusados contrarían el numeral 3 del artículo 55 y 59 del Decreto 1791 de 2000; 29 constitucional y desconocen los principios de igualdad y estabilidad laboral reforzada, son las siguientes:

2.1. La medida adoptada por la entidad demandada en las actas médico laborales acusadas en sus dos instancias de no sugerirle reubicación laboral al actor, contraria el artículo 29 constitucional, porque tal sugerencia no está acorde con los verdaderos criterios técnicos, objetivos y especializados en los cuales

²⁸ Consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, Sección segunda, Subsección “b” consejero ponente: gerardo arenas monsalve, sentencia del siete (7) de octubre de dos mil diez (2010) radicación número: 76001-23-31-000-2004-05185-01(0319-09), Actor: luis fernando buritica arenas. Demandado: ministerio de defensa nacional.

se debieron fundar, no recomendar la reubicación laboral, es omitir las sendas capacitaciones que el actor realizó en la institución, de tal forma se transgredió el numeral 3 del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000 y el resto del artículo 59 del mismo Decreto en el entendido que el retiro del servicio por disminución de la capacidad sicofísica sólo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción. Así pues tal contrariedad se evidencia en la inobservancia de las entidades sin justa causa a los lineamientos que traza la corte constitucional en la sentencia C 381 del 2005, en donde se indicó:

En consecuencia, si una persona vinculada a la Policía Nacional sufre una disminución de su capacidad sicofísica, la institución está en el deber constitucional de intentar, en principio, su reubicación a una plaza en la cual pueda cumplir con una función útil a la institución.

El medio adoptado por el legislador, en cuanto excluye a personas cuyas capacidades son aprovechables en otras actividades o labores desarrolladas en la Policía Nacional y distintas a las meramente operativas, resulta ser discriminatorio y el más caro para lograr el fin propuesto

En ese orden de ideas, la norma resultaría inconstitucional, salvo que se la armonice con la acción positiva por parte del Estado de brindar la protección especial debida a las personas discapacitadas y que se limite a aquel sector de la población cuya vinculación efectivamente causaría un perjuicio desproporcionado a la institución..

2.2. En el presente caso debe declararse la nulidad de los actos administrativos acusados y por ende debe aplicarse el artículo 59 del decreto 1791 del 2000 toda vez que frente al caso en concreto del señor patrullero LUIS ANGEL AROCA PATIO, la argumentación esbozada por la entidades demandadas respecto a la

supuesta causal de retiro del retiro (i) desconoce el principio de estabilidad laboral reforzada, explicado in extenso en este libelo demandatorio, según el cual una persona que sufre una disminución en su capacidad laboral como consecuencia directa del trabajo o labor que desempeña, debe gozar de una protección especial y en consecuencia explorarse la posibilidad de ser reubicada laboralmente; (ii) por no motivar la decisión adoptada y contrariar de esa manera en lo concerniente a su eventual reubicación, el debido proceso del accionante es afectado de forma directa contrariando de esa forma el artículo 29 constitucional; pues La entidad accionada, como garantía fundamental del debido proceso, debió fundamentar una a una las razones que motivaban el retiro del agente de Policía, y no lo hizo, omitió enunciar los fundamentos por los cuales no era viable la reubicación laboral del actor, no obstante está probado en el expediente que el actor si tenía la capacidad mental y física y estaba preparado en competencias que lo hacían útil para la institución tales como funciones administrativas de docencia o de instrucción, pues el extracto de su hoja de vida demuestra sendas capacitaciones que realizó en la institución y en la cuales podía ser aprovechado²⁹. En conclusión la decisión de retirar al actor se aprecia realmente arbitraria dictada al margen de tales justificaciones y porque los criterios examinados en las actas médicos laborales que se acusan no están de cara al contenido teleológico y axiológico que consagra las sentencias C-381 del 2005, T 1048 del 2012 y T 362 del 2012 de la honorable corte constitucional.

Al respecto, la honorable corte constitucional en sentencia T 362 del 2012, se pronunció en un caso similar al que hoy nos ocupa, en donde limitó el retiro de miembro de la policía nacional por disminución de la capacidad psicofísica, maniando que solo procedía siempre y cuando se cumplieran los siguientes presupuesto: (i) que existiera concepto desfavorable de Junta Médico Laboral sobre reubicación de uniformado y (ii) que sus capacidades no se pueden aprovechar en actividades administrativas, docentes o de instrucción:

En esas condiciones, la Corte concluye que no basta con una simple negativa a la posibilidad de reubicación, ya que una vez cumplidos los requisitos, los méritos, las calidades y atendiendo al derecho a la estabilidad laboral reforzada a que antes se hizo mención, la entidad debía emitir concepto razonado si consideraba que no era procedente tal figura. La

²⁹ Ver folios 25-31 adjuntos

jurisprudencia aplicable a este caso sentada desde la sentencia C- 381 de 2005, reiterada en la sentencia T-237 de 2010 coincide en que la causal de retiro por disminución de la capacidad sicofísica debe interpretarse sin excluir a las personas con disminución psicofísica cuyas capacidades puedan ser aprovechadas en otras actividades o labores dentro de la Policía Nacional, diferentes de las meramente operativas; de lo contrario, se infringen claramente derechos de los sujetos de especial protección constitucional.

2. En relación con la segunda disposición cuestionada en esta tutela, es decir el acto administrativo contenido en la Resolución 00549 de 2 de marzo de 2011, por medio del cual se decidió el retiró del servicio del accionante, valgan similares consideraciones.

Se lee en la Resolución 00549 de 2 de marzo de 2011: “1. Retirar del servicio activo de la Policía Nacional, por disminución de la capacidad sicofísica, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 inciso 1º. y 55 numeral 3º. del Decreto Ley 1791 de 2000, al personal que se relaciona: Patrullero Miguel Ángel Pineda Salazar disminución de la capacidad laboral del 32.83 %”.

Con esta decisión escueta, la Policía Nacional vulneró los derechos del actor en dos facetas: (i) por desconocer el principio de estabilidad laboral reforzada, explicado in extenso en este fallo, según el cual una persona que sufre una disminución en su capacidad laboral como consecuencia directa del trabajo o labor que desempeña, debe gozar de una protección especial y en consecuencia explorarse la posibilidad de ser reubicada laboralmente; (ii) por no motivar la decisión adoptada y contrariar de esa manera en lo concerniente a su eventual reubicación, el debido proceso del accionante. La entidad, como garantía fundamental del debido proceso, debió fundamentar una a una las razones que motivaban el retiro del agente de Policía, enunciar los fundamentos por los cuales no era viable su reubicación laboral no obstante tener capacidad mental y física y estar preparado en competencias que lo hacían útil para la institución. La decisión se aprecia realmente arbitraria dictada al margen de tales justificaciones.

3. Mención final merece otro de los ítems de la demanda relacionado con la competencia en el tiempo para dictar la resolución de retiro, en donde se advierte igualmente una violación del debido proceso que claramente terminó por afectar los derechos fundamentales del accionante.

El Decreto 1796 de 2000, regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

El artículo segundo describe la capacidad psicofísica como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones. Indica igualmente que la capacidad sicofísica será valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Según el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, el “concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales; sobrepasado este término, continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica (...)”

Significa esta norma que el diagnóstico médico en el que se soporta la salida del miembro de la Policía debe estar vigente al momento de proceder al retiro; la disposición indica que son 90 días siguientes a la expedición de la calificación médica. De tal manera que si el acto de retiro se expide con base en un concepto médico vencido, su motivación no corresponde a la realidad, como sucedió en este caso, en el cual, desde la óptica constitucional, se retiró a una persona del servicio de la Policía con consecuencias graves para sus derechos a la salud y sus condiciones de vida digna, cuando para la época no tenía concepto vigente ni se consideraba “no apto”.

En el sub lite, el Tribunal Médico Laboral, emite el dictamen el día 26 de octubre de 2010, según acta del Tribunal Médico Laboral número 4408 registrada al folio número 244 del libro de dicho ente médico laboral, mientras la resolución por medio de la cual la Policía Nacional decide retirarlo del servicio activo fue dictada el día 2 de marzo de 2011, cuando ya el soporte médico había perdido toda validez en el tiempo. Se frustró de esa manera (i) la posibilidad de continuar la recuperación; (ii)

se le dio carácter permanente a un dictamen médico cuya validez era solo por tres meses y (iii) terminaron por afectarse derechos sensibles del accionante como el trabajo, salud y su mínimo vital.

4. Como se indicó en el acápite de procedencia de la tutela, el accionante es un sujeto de especial protección constitucional, debido al estado de vulnerabilidad en que se encuentra por el padecimiento de una incapacidad que lo imposibilita para trabajar y que fue ocasionada como consecuencia de un ataque con arma de fuego, por razones y en virtud del servicio prestado a la Policía Nacional; dentro del expediente existen afirmaciones que no fueron controvertidas a lo largo del proceso, y que revelan la carencia de medios de subsistencia del accionante, quien no tiene seguridad social, su situación emocional es progresiva al agravarse su estado depresivo por la imposibilidad de trabajar y ser una carga para su familia; núcleo familiar que tampoco cuenta con medios para subsistir, su esposa no tiene trabajo en la actualidad y se mantienen en condiciones muy precarias en una casa del municipio de Soacha³⁰.

Tales circunstancias aceleran el mecanismo transitorio para evitar perjuicios inminentes e irremediables y por ello se concederá de forma transitoria la tutela de los derechos invocados por el señor Miguel Ángel Pineda Salazar, hasta tanto la jurisdicción competente se pronuncie sobre el presente asunto. Pudo conocer esta Sala, por información de la oficina jurídica de la entidad accionada, que existe demanda contenciosa presentada por competencia territorial ante un juzgado administrativo de Girardot y admitida desde el 8 de marzo de 2012, según informe enviado por el propio juzgado a esta Corporación.³¹

En consecuencia, se ordenará a la Policía Nacional que deje sin efecto el acto de desvinculación del accionante y una vez se notifique del presente fallo, proceda al reintegro inmediato y transitorio del señor Pineda Salazar³² a un cargo en el que pueda desempeñarse dentro de la Institución, previa la capacitación que deba suministrársele. Igualmente se ordenará el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que permaneció por fuera de la institución, y que se realice un seguimiento a la enfermedad del accionante. Si en la oportunidad correspondiente, el profesional médico considera que no es idóneo para continuar vinculado a la Policía, las decisiones pertinentes deben observar las directrices

³⁰ Folio 88 del expediente.

³¹ Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Girardot. Expediente 25307-33-31-701 - 2011-00122-00.

³² En el mismo sentido la decisión adoptada en la tutela T- 237 de 2010.

constitucionales aquí expuestas y las contenidas en los Decretos 1791 y 1796 de 2000. En todo caso, no debe pasar por alto la institución que el señor Pineda Salazar ingresó al servicio en perfectas condiciones físicas y síquicas, razón por la cual, en caso de ser desvinculado, la obligación de la Policía Nacional de prestar los servicios médicos requeridos, subsiste hasta tanto no se restablezca o estabilice su salud, toda vez que la lesión se adquirió con ocasión del servicio.

En conclusión, es evidente que las autoridades medico laborales, fueron caprichosas, negligentes y omisivas al desconocer los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables al caso en concreto, pues con tal omisión se contrarían las normas constitucionales y legales citadas ab initio, pero en especial, al haber omitió las capacitaciones que tenía el actor, se contrariaron las normas en las que se debían fundar, ello es las **excepciones al retiro por disminución de la capacidad sicofísica de que trata el artículo 59 del Decreto 1791 del 2000**, en el entendido que el retiro del servicio por disminución de la capacidad sicofísica del actor, sólo era procedente una vez las autoridades medico laborales hubiesen analizado y valorado bajo criterios técnicos, objetivos y especializados el porqué de acuerdo a las capacidades del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO no podían ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción, análisis que fue objeto de omisión.

IX. PRUEBAS:

Solicito se decreten, practiquen e incorporen al presente proceso administrativo como pruebas y se tengan como tales al momento de fallar, las siguientes, estas pruebas son pertinentes, conducentes y útiles pues tiene como objeto desvirtuar la presunción de legalidad y de veracidad de los actos administrativos acusadas

1. DOCUMENTALES APORTADOS:

1. Copia simple de carnet policial del actor
2. acta medico laboral No. 1717 Del 11 de diciembre del 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca
3. acta medico laboral M15-174 MDNSG-TML-41.1 registrada a folio No. 055 del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía

de fecha 25 de agosto del 2015 proferida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía

4. Copia de resolución de retiro No. 05492 del 07 de diciembre del 2015 proferido por el director general de la policía nacional
5. constancias varias de cursos y capacitaciones del actor que demuestran ser apto para desempeñar funciones administrativas
6. constancia laboral del actor
7. extracto de hoja de vida del actor
8. constancia de sueldo del actor
9. extracto de constancias de incapacidades y/o excusas medicas del actor en la policía nacional
10. folio de vida y calificaciones del actor
11. prueba extraprocesal
12. registro civil de nacimiento del niño CAMILO AROCA
13. Constancia, signada por la directora nacional de escuelas de la policía nacional, Brigadier general MIREYA CORDON LOPEZ, donde se acredita que el señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, es escogido como el representante del departamento de policía valle del cauca, para presentar diversas pruebas de PSICOTECNIA Y CONOCIMIENTOS POLICIALES, decisión a la que se llego después del estudio de la actitud psicofísica como no apto, **Si** reubicacion laboral.
14. Copia de la cedula de ciudadanía del actor
15. Historia clínica personal del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO

2. **DOCUMENTALES SOLICITADAS:**

1. solicito al honorable juez le ordene a la policía nacional allegue copia autentica del acta de posesión del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, CC No. 1.075.217.815 de Neiva (H)
2. solicito al honorable juez le ordene a la oficina de talento humano del departamento de policía valle que llegue con destino a su despacho todas las capacitaciones y cursos que realizo el señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO durante su vida laboral activa en la policía nacional
3. solicito al honorable juez le ordene a la seccional de sanidad valle del cuaca la cual se ubica en la avenida 10 norte No. 16 N-21, barrio nueva granada en la ciudad de Cali valle, para que con destino a su despacho allegue certificaciones académicas existentes de aptitud ocupacional del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO

4. Así mismo solicito al honorable juez le ordene a la oficina de salud ocupación del departamento de policía valle del cauca ubicado en Santiago de Cali, calle 21 No. 1N-65, barrio Piloto, Teléfono (032) 8981260/61, para que con destino a su despacho allegue certificaciones académicas existentes de aptitud ocupacional del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, de los años al 2014 y otros años anteriores.
5. Le solicito le ordene al **PAGADOR** del departamento de policía valle del cauca o **JEFE DE NOMINA**, para que con destino a su despacho allegue constancia del salario que devengaba el señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, como patrullero de la policía nacional.

Esta prueba debe pedirse a través de la entidad demandada DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA ubicado en Santiago de Cali, calle 21 No. 1N-65.

3. TESTIMONIALES

1. Rusbel Gonzales quintero
2. Maribel Gómez Gómez
3. Leidy yohana Restrepo santa

Los anteriores se podrán notificar en la carrera 41 G No. 56-59 de tulua valle. El entorno de estas pruebas es demostrar hechos que interesan al proceso y ante todos Acreditaran la graves aflicción que produjo los perjuicios morales ocasionaron las actas medico laborales acusados

4. PERICIALES-MEDICO LABORALES:

Solicito al honorable juez que designe a la junta medico regional de invalidez del valle del cauca, ubicada en la calle 5 E No. 42 A-05, B/ Tequendama en la ciudad de Cali, o a la junta quien usted estime conveniente para que tomando en cuenta la historia clínica psiquiátrica del señor **LUIS ÁNGEL AROCA PATIO** y los antecedentes clínicos, diagnostique sobre lo siguientes: **a)** cual es el porcentaje actual de la perdida de la capacidad medico laboral generada al señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO conforme al diagnostico de **TRASTORNO DE ANSIEDAD** (patología psiquiátrica), **b)** que deficiencias,

discapacidades y minusvalía le produjeron al señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, el trastorno de ansiedad o la patología que según su criterio exista o no, C) cual es el grado de perturbación funcional e invalidez que le generaron la patología psiquiátrica al señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, **D)** diagnostique si al señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, se le puede reubicar laboralmente en funciones administrativas para que ejerza funciones administrativas, docentes o de instrucción, teniendo en cuenta la patología psiquiátrica que este presenta, según su existencia o inexistencia, y teniendo en cuenta sus capacitaciones las cuales se aportan E) diagnostique si la patología psiquiátrica que presenta el señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, lo imposibilitan para ejercer funciones administrativas en educación, docencia o instrucción en la policía nacional, F) diagnostique si la patología del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, es degenerativa o si por el contrario ha presentado mejoría.

5. PERICIAL:

Le Solicito al honorable juez designe a **UN PSIQUIATRA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** para que diagnostique sobre lo siguientes: **a)** conforme a la historia clínica personal del señor **LUIS ÁNGEL AROCA PATIO y al estado de su salud actual**, le solicito emita diagnostico clínico respecto a la patología real que presenta, B) conforme al anterior, solicito emita concepto o absuelva el siguientes cuestionario (i) si dichas lesiones limitan el funcionamiento normal del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, (ii) si dichas lesiones limitan o inciden en el grado de orientación, independencia física, desplazamiento, ocupación, integración social y autosuficiencia del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO,(iii) si dichas lesiones limitan la locomoción, comunicación, cuidado personal, disposiciones del cuerpo y destreza del señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, (iv) si dichas lesiones impiden que el señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, realice labores administrativas en la policía nacional, (v) si la patología psiquiátrica que representan LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, constituye o pone en peligro su vida y la de sus compañeros en la policía nacional.

6. INTERROGATORIO DE PARTE:

El día y la hora que el honorable juez estime conveniente formulare interrogatorio de parte de forma verbal o en sobre cerrado al señor

LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, donde se darán a conocer hechos que interesan al proceso.

II. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA:

La estimación razonada de la cuantía está debidamente relacionada y asciende a \$ 73. 640.434.00

1. Perjuicios patrimoniales consolidados:

Lucro cesante consolidado: con la producción del acto administrativo acusado por parte de la entidad demandada, el señor LUIS ÁNGEL AROCA PATIO como patrullero de la policía nacional dejo de devengar mensualmente un sueldo de un millón trescientos ochenta mil pesos (\$1.380.000) suma que al presentación de la demanda asciende a :

S = Ra [(1+i)ⁿ -1/ i] QUE VAN DESDE EL ACTO DE NOTIFICACION DE REITO HASTA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA

$$S = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i}$$
$$S= \frac{1.380.000.00 (1+0.004867)^4 - 1}{0.004867}$$

S = \$ 5,560,434.26

2. perjuicios extrapatrimoniales:

PERJUICIOS MORALES: deberá pagársele al demandante el equivalente a 100 S.M.L.M.V que representado en pesos colombianos serian:

LUIS ÁNGEL AROCA PATIO	\$ 68´670000
<hr/>	
TOTAL PERJUICIOS MORALES	\$ 68´670000

SUMATORIA DE PERJUICIOS

Perjuicios patrimoniales (lucro cesante consolidado) \$ 5, 560,434.

Perjuicios morales	\$ 68´670.000
TOTAL DE PERJUICIOS	\$ 73. 640.434

X. COMPETENCIA POR FACTOR CUANTÍA :

Con fundamento en el numeral 3 del artículo 155 ley 1437 del 2011, es competente en primera instancia el honorable juez administrativo de Buga, en razón de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvierte actos administrativo de cualquier autoridad, toda vez que los perjuicios que se reclaman NO son superior a los **QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES** (500 SMLMV) y que a la presentación de la demanda se estima ascienden a \$ 73´640.434.00

XI. COMPETENCIA POR FACTOR TERRITORIAL:

Con fundamento en el numeral 3 del artículo 156 ley 1437 del 2011, es competente el honorable juez administrativo de Buga, toda vez que ***afirmo bajo la gravedad de juramento*** que el último lugar donde prestó los servicios como policía el SEÑOR LUIS ÁNGEL AROCA PATIO, fue en la estación de policía tulua (V).

XII. DECLARACIÓN JURADA:

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he presentado demandas ante la corporación administrativa con base a estas pretensiones y mismos hechos.

XIII. PROCESO A SEGUIR

El proceso a seguir es el declarativo, previsto en el artículo del 138 de la ley 1437 del 2011 (CPACA), nulidad y restablecimiento del derecho.

XIV. ANEXOS:

Adjuntos a esta demanda los siguientes documentos:

1. constancia de requisito de procedibilidad emitida por la procuraduría general delegada ante los juzgados administrativos.
2. sendas copias de la demanda y sus anexos para el traslado a la demandada y al agente del ministerio público.
3. copia para el archivo del juzgado
4. poder especiales para actuar

5. pruebas anticipadas (extrajudiciales y documentales) las que se encuentran en mi poder.
6. Constancia de notificación a la agencia nación de defensa jurídica del estado.
7. Copia Demanda y sus anexos en folio magnético **CD**.

XV. NOTIFICACIONES :

- **DEMANDADA:** ministerio de defensa- policía nacional en Santiago de Cali, calle 21 No. 1N-65, barrió Piloto, Teléfono (032) 8981260/61
- **DEMANDANTE:** recibe notificación en la secretaria del despacho o en la carrera calle 13 B No. 38 C -108, B/ cóndor 2 en tulua valle tel. 3006244030 o 3113002398.
- **APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE:** recibo notificación en la secretaria del despacho o en la carrera 10 No. 16-43 en zarzal valle del cauca e tel. 3006244030 y autorizo recibir todo tipo de notificaciones en el siguiente correo electrónico: **hectorortizmejia16@gmail.com**

Respetuosamente,

El original firmado por el mismo

JOHN WILSON PLATA MÉNDEZ

CC No. 94.460.461 de Cali

T.P No. 160.099 del C.S de la judicatura.

Dirección: calle 13 B No.38 C -108, B/ cóndor 2 tulua valle, tel.

3006244030. Correo: hectorortizmejia16@gmail.com